



Los afectados se han manifestado en cada una de las sesiones plenarias celebradas a lo largo del año 2004 en el Ayuntamiento de Castellón. / TORRES

‘Mestrets’ valora la predisposición municipal pero pide la oferta «detallada por escrito»

► Los vecinos se preguntan cuándo y dónde se producirá el realojo y las características y el valor de los adosados ► Solicitan información sobre los derechos urbanísticos y las cesiones

CHELO PASTOR
CASTELLÓN.— Los vecinos de Mestrets afectados por la recalificación de Suelo No Urbanizable para promover VPO declaran que agradecen «la predisposición del Ayuntamiento» respecto a la búsqueda de un consenso de ambas partes. Eso sí, muchas «dudas» siguen planeando entre los afectados por el derribo de sus *masets* y su posterior realojo en las viviendas unifamiliares adosadas que promoverá el consistorio en colaboración con el Institut Valencià de la Vivenda (IVVSA).

La asociación *Mestrets-Borriolench* solicita al alcalde en funciones, Alberto Fabra, con quien se entrevistaron el pasado martes los abogados de los afectados y el presidente de la coordinadora, Vicent Beltrán, que explicita por escrito los detalles de la oferta municipal a los afectados.

«No sabemos cuándo se producirá el realojo, ni el lugar exacto, ni el tipo de vivienda, ni su valor...». Estas son algunas de las muchas preguntas que se hacen los vecinos que verán caer bajo la piqueta sus casas y sus huertos como consecuencia de la urbanización de los cerca de 900.000 metros cuadrados recalificados para promover 6.000 viviendas, de las que la mitad, aproximadamente, serán de protección oficial.

Según explicó Lluïsa Pérez en nombre de los afectados, «la preocupación y la angustia nos persigue constantemente». «No queremos que el Ayuntamiento interprete que nos tiende la mano y nosotros la retiramos», sino que «lo que necesitamos es un compromiso por escrito de las condiciones en que se llevará a cabo el realojo», señalan.

Pérez advierte que no es la primera vez que solicitan que el equi-

po de gobierno municipal entregue un informe detallado.

Hasta el momento, no ha habido más que explicaciones verbales sobre la actuación que, en la optimista opinión del gerente del IVVSA, José Fermín Doménech, «se pacta-

Quieren conocer qué derechos urbanísticos afectan tras la cesión del 57% de sus terrenos

rará en apenas dos o tres meses» para iniciar los trabajos cuanto antes.

Según las declaraciones recogidas por EL MUNDO entre los vecinos de la zona comprendida entre los caminos de Penyeta Roja y Mestrets y la Cuadra del Borriolench, durante el encuentro cele-

brado el pasado martes, surgió una nueva duda: «Qué derechos urbanísticos nos corresponden después de ceder el 75% de nuestros terrenos». La decisión del Ayuntamiento y del IVVSA para desarrollar este programa urbanístico pasa por la aportación de los vecinos de tres cuartos de sus propiedades, sin dejar abierta la posibilidad de que participen en los costes de urbanización con dinero en metálico.

El alcalde en funciones, por su parte, espera una respuesta afirmativa en el plazo de un mes, consenso del que ayer los portavoces vecinales no quisieron hablar. Antes habrá una asamblea para que los diferentes asesores jurídicos contratados por los afectados expliquen detalladamente la situación. Al margen, el colectivo pide a Alberto Fabra que redacte las condiciones en que está previsto efectuar el realojo.

«Las palabras se las lleva el viento»

CASTELLÓN.— Corría el mes de noviembre de 2003 cuando el alcalde en funciones, Alberto Fabra, en calidad de concejal de Urbanismo, declaraba que las casas que se reparten por la cuadra Segona «serán respetadas» e, incluso, afirmó que «favoreceremos mantener la tipología de estas viviendas en el entorno más próximo a las casas ya consolidadas».

Los vecinos no olvidan esta declaración de Fabra y, dado el giro que ha tomado el asunto, consideran que es imprescindible que el consistorio detalle por escrito las condiciones definitivas derivadas de la recalificación del suelo donde levantaron sus casas décadas atrás.

Del realojo comenzó a hablarse en diciembre de 2003. Desde la Gestora Urbana Municipal (GUMSA) afirmaron que se conveniría con los constructores que acabaran promoviendo los bloques de VPO el realojo de los afectados. El gerente de GUMSA propuso que se reservaran pisos para las familias que perderían sus casas. Fabra también avanzó que el convenio con el IVVSA no se firmaría hasta 2004.

Movilizaciones

Los vecinos comenzaron a movilizarse en enero de 2004 y crearon la asociación de afectados para «evitar el derribo de 10 *masets*». Advirtieron su intención de acudir a los tribunales para defender sus propiedades. En un mes, iniciaron una recogida de firmas contra la recalificación y reivindicaron que se redujera la anchura del camino Mestrets para evitar derribos. Además, rechazaron la zona, junto al grupo San Agustín-San Marcos donde esta previsto el realojo.

El 19 de abril, Fabra anunció que reducirían el camino a 30 metros. Sin embargo, los vecinos denunciaron que se creaba una zona de protección de 45 metros, que, igualmente, impedía las edificaciones. Apenas tres días después, los afectados lamentan estar «desinformados» y se suman a la reivindicación los vecinos a los que afecta la adscripción de una zona verde. Piden que se traslade, pero no hay marcha atrás.